

Presentación

A finales de la década de 1950, los gobiernos de América Latina y El Caribe (ALyC) acordaron la implementación de una serie de reformas para “avanzar por el camino del desarrollo”. El BID fue una de las instituciones creadas para alcanzar ese propósito. Se fundó en 1959, cuando los países integrantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) redactaron y suscribieron el *Convenio constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo*. El primer artículo de dicho documento –que incluye el “principio orientador” de sus acciones desde entonces–, señalaba como su objetivo fundamental *contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo, de los países miembros regionales en vías de desarrollo*.

El balance realizado por las organizaciones sociales y populares, así como por algunos sectores intelectuales de orientación crítica, permite rebatir los resultados alcanzados cincuenta años después. ALyC tienen la peor distribución de la riqueza en el mundo. La evidencia empírica permite validar ese aserto: 184 millones de personas en la región, es decir, el 34,1% de su población, se encuentran en situación de pobreza. Los resultados ofrecidos por la labor del banco son francamente desalentadores y totalmente desdeñables. La pobreza, la miseria, la desigualdad, el desarrollo asimétrico, la reprimarización de las economías de la región, la inestabilidad en su crecimiento económico, el desempleo, la informalidad y la mayor vulnerabilidad externa, componen un conjunto de consecuencias socio-económicas y políticas que, lejos de ajustarse a su objetivo fundante, son fiel reflejo de las circunstancias políticas, estratégicas e históricas que verdaderamente han definido los derroteros, intereses y objetivos de esta institución.

Una mirada a la historia permite determinar con claridad el verdadero objetivo del BID en su origen y la identidad que, de manera prácticamente inmutable, mantendría hacia adelante. En efecto, en conjugación con el ideal de *desarrollo económico moderno* –que a la postre no significaría otra cosa que la imposición de esquemas de modernización autoritaria y de modelos hegemónicos de desarrollo–, el BID fue concebido como un mecanismo de contención de las presiones comunistas, socialistas y progresistas que en la segunda posguerra caracterizaban a América Latina. Bajo la categoría de la modernización se definía un modelo hegemónico de desarrollo que al tomar como referente el camino seguido por los países del norte occidental, intentaba apartar las presiones anteriormente señaladas y pretendía, además, mantener el dominio de Estados Unidos en la región. Esta misma noción hegemónica de desarrollo (la modernización) sería la base de lo que casi 40 años después se concebiría como “el fin de la historia”; es decir, un modelo de economía de mercado y democracia representativa procapitalista.

La urbanización, la inversión en infraestructura social y económica, el olvido de los “rasgos tradicionales y premodernos”, los cambios institucionales graduales, la homogeneización institucional y el carácter “irreversible” y lineal de la “occidentalización” serían los objetivos que, de manera más o menos conciliatoria serían buscados en las sociedades latinoamericanas para alcanzar el bienestar exhibido en su momento por las economías del Norte. Y se dice “conciliatorio” porque las circunstancias históricas del momento empujaban a Estados Unidos a enfrentar con cautela el “latinoamericanismo” surgido en el marco de la revolución cubana, los procesos de industrialización y sustitución de importaciones, la difusión de la teología de la liberación, Mayo del 68, la derrota de Vietnam y la extensión política del comunismo en la región.

No obstante, la actitud gradualista, tolerante y acomodaticia pronto cedería el paso a un nuevo modelo de neomodernización orientado hacia el exterior mucho más violento y unidimensional: la crisis del régimen fordista de acumulación, el fortalecimiento del sector financiero internacional y la violencia propia de los regímenes dictatoriales emergentes en la región –en los que no puede desconocerse la complicidad del BID, así como de las otras Instituciones

Financieras Internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), en su financiación— aprovecharían el agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y, en plena sintonía con la llegada de los conservadores al poder en los Estados Unidos e Inglaterra, servirían de catalizadores para el movimiento hacia un proceso histórico “revolucionario” que culminaría con la crisis de la deuda de 1982 y la consagración de las prescripciones neoliberales de política condensadas en el Consenso de Washington de 1989¹.

Pronto el BID se involucraría de manera directa en la promoción del decálogo de políticas del Consenso de Washington y, apelando a las restricciones macroeconómicas impuestas desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), definiría los matices que acompañarían a las prescripciones generales y sectoriales que en materia de desarrollo se impartían desde el Banco Mundial (BM). De tal suerte,

¹ Puede decirse que es “revolucionario” si se tienen en cuenta los cambios sociales, económicos y políticos generados y el relativamente poco tiempo en que se consiguieron dichos cambios. Siguiendo a Sader (2008), los ciclos progresistas y de izquierda han sido recurrentes en América Latina y han dominado una mayor parte temporal de su historia reciente: entre 1959 y 2008 los “ciclos progresistas” en América Latina acumulan, aproximadamente, un total de 29 años, mientras que los “ciclos de retroceso” acumulan un total de 14. La efectividad política de dichos ciclos ha sido, sin embargo, muy diferente. Estos ciclos implican “calibraciones” permanentes en el balance de poder. El primer ciclo progresista y de izquierda (1959-1967) se inicia con el triunfo de la Revolución Cubana, la expansión de las guerrillas rurales en Venezuela, Guatemala, Perú, Colombia y Nicaragua; finaliza con la muerte del Che Guevara en Bolivia en 1967 y representa un momento de amplio ascenso en las luchas por la resistencia en la región. El segundo (1967-1973) se caracteriza por el declive de las guerrillas rurales y el ascenso de las guerrillas urbanas en Brasil, Uruguay y Argentina. Salvador Allende es elegido presidente en Chile (1970-1973), se establecen los gobiernos nacionalistas de Juan Velasco Alvarado en Perú (1967) y Omar Torrijos en Panamá (1968). Este periodo se considera mixto en cuanto a avances y retrocesos de las fuerzas progresistas debido a la aparición de la primera ola de autoritarismos en la región. Entre 1973 y 1979 se presenta un periodo de retroceso definitivo debido a la consolidación de las dictaduras militares en el Cono Sur y la implementación del modelo neoliberal en Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Entre 1979 y 1990 se presenta un cierto progreso relacionado con la victoria sandinista en Nicaragua, la revolución en Granada y la consolidación del gobierno nacionalista en Surinam. Fidel Castro fue elegido presidente de los países No Alineados y las fuerzas de guerrillas se expanden en Guatemala, El Salvador y Colombia. Entre 1990 y 1998 se presenta un periodo de retroceso neto relacionado con la hegemonía de los programas neoliberales en la región, y entre 1998 y 2008 se presenta un nuevo avance generalizado asociado con el ascenso de gobiernos alternativos en la mayor parte de la región (Sader, 2008).

en coordinación con el BM y el FMI, el BID ha impuesto políticas económicas en ALyC, políticas que han terminado por enriquecer al sector financiero nacional y transnacional, por apoyar la inversión extranjera directa e incrementar la deuda externa de los países latinoamericanos, por sobreexplotar su fuerza de trabajo y expoliar sus recursos naturales.

La apertura económica en los mercados de bienes y capital, la competitividad, la inversión en los llamados “recursos humanos” y el acondicionamiento institucional y político requerido para garantizar los procesos de reproducción y acumulación del capital constituyen los fundamentos del reiterado discurso promovido desde el BID a partir del financiamiento de sus estudios, investigaciones y consultorías. No obstante, las líneas de crédito tradicionalmente abiertas y los programas prioritarios y regionales promovidos en la región se han concentrado en la inversión en infraestructura económica y social.

Al respecto, merecen especial mención la *Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana* y el *Plan Puebla Panamá*. Ambos buscan crear y articular geográficamente corredores estratégicos en la región para “potenciar el comercio internacional”, o mejor, para facilitar el acceso a los recursos naturales (petróleo, gas, agua, entre otros) por parte de las grandes empresas transnacionales. Sus nefastas consecuencias son ampliamente conocidas: procesos de expropiación violenta de tierras, desplazamientos de población y daños ambientales muy preocupantes.

La sombra de los Estados Unidos y la red transnacional de economías capitalistas “exitosas” (Japón y Europa) han oscurecido y complicado la consolidación de posibilidades de desarrollo y transformación social capaces de enfrentar de manera integral, efectiva y democrática la crisis social, económica, alimenticia, ambiental y energética que se ha gestado desde el momento mismo de la consagración del esquema de modernización y su posterior reformulación en clave de las prescripciones neoliberales del Consenso de Washington y sus reacondicionamientos posteriores (Consenso de Washington Ampliado (1995), Posconsenso de Washington (1999), Consenso de Barcelona (2004)). El BID como difusor, promotor e instrumento de implementación de este modelo de desarrollo es res-

ponsable de los efectos perversos que el modelo presenta en materia social, económica, política y ambiental.

A continuación serán desarrolladas estas ideas con mayor profundidad. En la primera parte del documento se presentará, a partir de un trazado histórico, el contexto en el que emergen las condiciones internacionales y regionales para la implementación de las tesis de la modernización y el tránsito hacia las reformas neoliberales del Consenso de Washington. Seguidamente, en el segundo apartado, se señalará la posición dominante asumida por Estados Unidos en relación con el BID, los vínculos que el BID ha establecido con el FMI y el BM, y la inmutable ortodoxia que históricamente ha defendido. En la tercera parte del documento se ofrece una presentación de las tendencias y los hechos observados en América Latina en relación con las estrategias del BID frente a cuatro sectores vitales para su modelo hegemónico de desarrollo: el crecimiento económico, el comercio internacional, la pobreza y las finanzas internacionales. Finalmente, pretendemos develar el significado político de dichas estrategias en el caso específico de Colombia durante el periodo 2003-2007 y trataremos de determinar, además, algunas de sus consecuencias.